

Los Derechos de sucesión pensional en la Ley del Seguro Social

Recibido 18 enero 2023-Aceptado 27 marzo 2023

Verónica Lidia Martínez Martínez*
Universidad Anáhuac México. Ciudad de México
veronica.martinezma@anahuac.mx

RESUMEN: *Partiendo de la conceptualización del beneficiario legal, su clasificación y los requisitos que deben cumplir, conforme a la Ley del Seguro Social, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social los inscriba y reconozca como beneficiarios del titular del derecho, en este trabajo se analizan los requisitos que deben observar los beneficiarios para acceder a los derechos de sucesión pensional y conservarlos en los seguros de riesgos de trabajo y vida, aunque se transgredan sus derechos humanos.*

Palabras clave: Seguros sociales, riesgos de trabajo, seguro de vida, muerte, beneficiarios, sucesión pensional, Instituto Mexicano del Seguro Social.

ABSTRACT: *Based on the conceptualization of the legal beneficiary, its classification and the requirements that must be met, in accordance with the Social Security Law, for the Mexican Institute of Social Security to register and recognize them as beneficiaries of the right holder, in this work analyze the requirements that beneficiaries must meet to access pension succession rights and keep them in work and life risk insurance, even if their human rights are violated.*

Keywords: Social security, work risks, life insurance, death, beneficiaries, pension succession, Mexican Social Security Institute.

SUMARIO. Introducción. 1. Los beneficiarios en la Ley del Seguro Social. 2. Acceso a los derechos de sucesión pensional en el seguro de riesgos de trabajo establecido en la Ley del Seguro Social. 3. Acceso a los derechos de sucesión pensional en el seguro de vida

* Investigadora Nacional del CONAHCYT e Investigadora asociada a la Universidad Anáhuac México.

establecido en la Ley del Seguro Social. 4. Mantenimiento de los derechos de sucesión pensional en la Ley del Seguro Social. Conclusión. Fuentes de consulta.

Introducción

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la familia como institución ha ocupado un lugar importante en todos los ámbitos de la vida. Su regulación en el Derecho de la Seguridad Social, principalmente, está encaminada a brindar protección y seguridad jurídica al asegurado o pensionado y a los miembros que integran su familia, a través de las prestaciones conferidas o de los derechos de sucesión pensional cuando se reúnen los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social (LSS) para su otorgamiento y cobertura.

El presente trabajo, con el apoyo del método analítico, tiene como objetivo exponer la anticonstitucionalidad y la contravención a los tratados internacionales suscritos por el Senado de la República de ciertos requisitos que la LSS impone a los beneficiarios legales para acceder en los seguros de riesgos de trabajo y vida a los derechos de sucesión pensional y conservarlos. Para lograr tal cometido, el trabajo se divide en cuatro partes.

En la primera parte, partiendo de la conceptualización del beneficiario y los diversos criterios para clasificarlo, son analizados los requisitos que deben reunirse para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les atribuya el carácter de beneficiarios del titular del derecho, en su modalidad de asegurado (a) o pensionado (a).

En la segunda parte son analizados los derechos de sucesión pensional en el seguro de riesgos de trabajo y los requisitos que deben reunir los beneficiarios legales para el otorgamiento de los mismos. En la tercera parte, nos ocupamos de analizar los derechos de sucesión pensional en el seguro de vida y los requisitos que deben cumplimentar los beneficiarios legales para la concesión de los mismos.

En la última parte, se analizan los requisitos, cuya observancia por parte de los beneficiarios legales, les permite mantener la cobertura de los derechos de sucesión pensional en los seguros de riesgos de trabajo y vida. Un rubro importante es el análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de los requisitos que posibilitan el disfrute de los derechos de sucesión pensional.

1. Los beneficiarios en la Ley del Seguro Social

El reconocimiento de los beneficiarios es un tema relevante en el ámbito de los sistemas de seguros sociales por los efectos económicos y financieros que genera, pues de operar su reconocimiento en cada uno de los seguros previstos en las leyes de seguros sociales

provocará que los organismos de seguros sociales destinen los recursos administrados para cubrir las prestaciones en dinero y otorguen las prestaciones en especie cuando sea procedente su cobertura.

En los sistemas de seguros sociales se reconoce como elemento subjetivo a los beneficiarios. La LSS, en contravención a la racionalidad comunicativa o lingüística, no proporciona un concepto del término beneficiario, sólo enuncia a los sujetos que pueden asumir tal carácter.

En el ámbito doctrinal, Silvestre Fernández Ruiz (1998) define al beneficiario como la persona a quien se extienden los derechos en el goce de los beneficios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social por razones de parentesco con el asegurado. Son los familiares del asegurado, quienes por disposición de la Ley del Seguro Social tienen derecho a recibir las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, por vigencia de derechos generados y la persona que ha sido afiliada para el disfrute de los beneficios comprendidos en uno o varios ramos de seguros.

Por su parte, el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social (1984) define al beneficiario como:

Toda persona a quien se extienden los derechos en el goce de los beneficios de la seguridad social que se otorgan por razones de parentesco con el asegurado. Son los familiares del asegurado que tienen derecho a recibir las prestaciones por vigencia de derechos generados.

Principalmente, la existencia de un sujeto de aseguramiento que tenga derecho a las prestaciones establecidas en la LSS y la existencia de una relación de parentesco consanguíneo de primer grado o por afinidad son los requisitos, que al ser de orden acumulativo, deberán ineludiblemente reunirse para tener el carácter de beneficiario.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar, 2021), los beneficiarios legales son los que tienen el derecho a disfrutar de las prestaciones (en dinero y en especie) que establece la LSS, aunque en su reconocimiento no intervenga la voluntad de los titulares de los derechos (asegurados o pensionados) porque está determinado por la LSS en favor de sus familiares más próximos.

Bajo este tenor, la LSS reconoce como beneficiarios legales a las parejas del sujeto de aseguramiento, en su modalidad de esposa, esposo, concubina o concubino (con hijos y sin hijos), a sus descendientes y padres, pero les impone una serie de requisitos que deben cumplimentar para tener el carácter de beneficiario y requisitos que deben observar para la conservación de ese carácter. Ambos requisitos dependerán del tipo de seguro o servicio

que soliciten administrativamente los beneficiarios legales ante el IMSS o demanden ante los Tribunales Laborales.

De igual manera, conforme a los artículos tercero y quinto transitorio de la actual LSS que hacen posible la coexistencia de este ordenamiento y de la LSS del 12 de marzo de 1973, es posible clasificar a los beneficiarios de la siguiente manera:

- a. Beneficiarios legales conforme a la LSS de 1973.
- b. Beneficiarios legales conforme a la LSS de 1997.

La LSS aplicable impone una serie de requisitos para que las personas puedan tener el carácter de beneficiarias y conservarlo. Por supuesto, que los requisitos a reunir dependerán del tipo de seguro o servicio que se solicite o reclame. Empero, la divergencia que impera en los ámbitos de validez temporal, material y personal de las leyes de seguros sociales (1973 y 1997) imposibilita que los requisitos a reunir para obtener y mantener el carácter de beneficiario sean los mismos.

El ámbito de validez temporal se refiere al tiempo en que una norma jurídica ha de reglar la realidad social o una parte de ella (Kelsen, 1995). Las normas jurídicas nacen a la vida jurídica a partir de una fecha determinada, que puede ser la de su entrada en vigor de una ley que se publica en un diario o periódico oficial y, de igual manera, podrían tener una fecha en que dejan de estar en vigor. Los requisitos que la LSS de 1973 establece para obtener y mantener la calidad de beneficiario son aplicables cuando el titular del derecho haya cotizado hasta el 30 de junio de 1997, pero si con posterioridad a esa fecha tuvo lugar el primer aseguramiento ante el régimen obligatorio del seguro social, la persona que pretenda su reconocimiento como beneficiario deberá reunir los requisitos consignados en la LSS de 1997.

A lo anterior se adiciona un dominio de validez objetivo o material y otro denominado personal. Conforme a la teoría de la validez de las normas jurídicas, el ámbito de validez objetivo permite identificar a la materia o contenido a reglar. Si bien la LSS de 1973 y la LSS de 1997 se ocupan de normar al seguro social como principal instrumento básico de la seguridad social, el primero de los ordenamientos, lo hace bajo un modelo de reparto con la existencia de los regímenes voluntario y obligatorio integrado por los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, así como al servicio de guarderías y prestaciones sociales administrados por el IMSS.

En cambio, la LSS de 1997 instauro un modelo de capitalización individual administrado por el IMSS y las Administradoras de Fondos para el Retiro en donde coexisten los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez junto con el servicio de guardería como partes del régimen obligatorio del seguro social y un régimen voluntario.

Como resultado de la divergencia que impera en los esquemas prestacionales de los seguros sociales reconocidos en la LSS de 1973 y 1997 y las formas de llevar a cabo su cuantificación, financiamiento y administración, por consecuencia los requisitos para adquirir y mantener la calidad de beneficiario dependerá del contenido material del ordenamiento aplicable y una vez identificado éste, deberá observarse el tipo de régimen aplicable, esto es, si es obligatorio o voluntario y el tipo de seguro que se solicita o reclama.

Por último, las normas jurídicas al no ser aplicables a todas las personas tienen un ámbito de validez personal que permite identificar a sus destinatarios. El ámbito de validez personal de la LSS son los asegurados y pensionados que hayan cotizado hasta el 30 de junio de 1997, mientras la LSS de 1997 tiene como titulares de los derechos a las personas, cuyo primer aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social haya tenido lugar a partir del 1 de julio de 1997, por lo que habrá que determinar qué ordenamiento es aplicable al destinatario de la norma para poder identificar los requisitos que deberán reunirse para obtener y mantener la calidad de beneficiario ante el IMSS.

Cabe mencionar que en la actual LSS, de cuyo análisis nos ocupamos en este trabajo, no prevé el derecho de sucesión pensional en todos los seguros que conforman el régimen obligatorio del seguro social. La procedencia del derecho de sucesión pensional opera cuando fallece el asegurado (a) o el pensionado (a) en favor de las personas señaladas en la LSS que reúnen los requisitos para ser considerados como beneficiarios del titular del derecho y deberán cumplir con las exigencias legales para la conservación de tal carácter que trae aparejado el otorgamiento y pago de las prestaciones contempladas en los seguros de riesgos de trabajo y vida.

El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado extiende el derecho de sustitución pensional y la cobertura de las prestaciones y servicios que adquieren los familiares derechohabientes en favor de las parejas del mismo sexo como resultado del reconocimiento de la unión civil que puede constituirse entre las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena para establecer un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido

en la legislación de las entidades federativas, como los pactos civiles de solidaridad y las sociedades de convivencia (Diario Oficial de la Federación, 2023).

La orientación sexual, al ser una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ha provocado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2017) se ocupe de ella en la Opinión Consultiva OC-24/17, en los términos siguientes:

La Convención Americana protege, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo. La Corte estima también que deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículos 1.1 y 24), todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo. Sin perjuicio de lo anterior, la obligación internacional de los Estados trasciende las cuestiones vinculadas únicamente a derechos patrimoniales y se proyecta a todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, así como a los derechos y obligaciones reconocidos en el derecho interno de cada Estado que surgen de los vínculos familiares de parejas heterosexuales.

Como resultado del reconocimiento y la protección de los derechos que tienen las parejas del mismo sexo, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa, que implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva (Corte IDH, 2016), toda vez que de utilizarse a la orientación sexual como argumento para desconocer o hacer nugatorios los derechos prestacionales y de sustitución pensional provocaría la transgresión de los derechos de igualdad, propiedad, protección de la familia, salud y de seguridad social.

De igual manera, dentro del marco del Sistema Universal de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos (2003) ha considerado que es deber de los Estados asegurar que la legislación no resulte discriminatoria contra las formas no tradicionales de unión y ha indicado, por ejemplo, que las diferencias de trato en el otorgamiento de prestaciones por jubilación a una pareja del mismo sexo constituyen una violación del derecho a estar libre de discriminación.

Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han exhortado a los Estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y de sus derechos humanos. En el ámbito internacional a través del litigio estratégico se han empleado los principios de igualdad y no discriminación para resolver los conflictos individuales de seguridad social que tienen como finalidad el otorgamiento de los derechos prestacionales y de sustitución pensional de las parejas homosexuales.

A manera de ejemplo, se encuentra el caso contencioso Duque en contra de Colombia que provocó que la Corte IDH (2016) determinará la responsabilidad del Estado colombiano por la violación al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación en perjuicio del señor Duque, por no haberle permitido acceder en condiciones de igualdad a la pensión de viudez con base en el hecho de que se trataba de una pareja del mismo sexo.

La misma determinación fue adoptada por el Comité de Derechos Humanos en el caso X, quien mantenía una relación de convivencia con el señor Y. A la muerte Y, el señor X solicitó que se le entregara la pensión por viudez que, de manera indebida, le fue denegada sobre la base que esta prestación sólo procede en el caso de las relaciones heterosexuales.

Otro caso es el suscitado en 1999, en donde Edward Young mantuvo durante 38 años una relación con el señor C, quien fue un veterano de guerra que murió el 20 de diciembre de 1998, a la edad de 73 años. El 1 de marzo de 1999, Edward Young solicitó una pensión con arreglo al artículo 13 de la Ley de Veteranos. Por su parte, el 12 de marzo de 1999, la Comisión de Repatriación denegó la solicitud porque no era un dependiente según lo definido por la ley, además de negarle una prestación por duelo por no reunir la calidad de miembro de una pareja al haber mantenido una relación del mismo sexo con C. Después de analizar el caso el Comité de Derechos Humanos (2000) determinó que la distinción entre parejas del mismo sexo, que están excluidos de los beneficios de pensión por ley, y las parejas heterosexuales no casadas, a quienes se les otorgan dichos beneficios, es discriminatoria y contraviene el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por lo tanto, negar los derechos de sustitución pensional a las parejas del mismo sexo por su orientación sexual, la cual forma parte de una identidad personal, constituye una discriminación injustificada proscrita por la CPEUM y los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República, además de transgredirse el derecho a la familia, reconocido en el artículo 4o. de la CPEUM, que brinda protección a todas las formas de familia, incluidas las formadas por parejas del mismo sexo.

2. Acceso a los derechos de sucesión pensional en el seguro de riesgos de trabajo establecido en la Ley del Seguro Social

La seguridad social como derecho humano fundamental y bien social genera cohesión, paz social, seguridad y permite la realización digna del ser humano en su entorno individual y colectivo. Uno de los instrumentos básicos de la seguridad social es el seguro social que protege al sujeto de aseguramiento y a sus beneficiarios en casos de necesidad contra

determinados riesgos que ponen en peligro su existencia, que lo dota de los medios para subsistir ante la enfermedad (profesional y general), el desempleo, el retiro laboral o la muerte.

La pérdida de la vida del asegurado (a) o pensionado (a) que, de acuerdo con el artículo 343 de la Ley General de Salud, ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible puede derivar de un riesgo de trabajo, lo que hace procedente los derechos de sucesión pensional en favor de los beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos en la LSS.

También se generan los derechos de sucesión pensional cuando la muerte del sujeto de aseguramiento tiene lugar bajo los supuestos que establece el artículo 46 de la LSS, esto es, cuando el asegurado se ocasiona de manera intencional una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona, cuando la incapacidad o el siniestro sea resultado de alguna riña, intento de suicidio o delito intencional del que fuere responsable el sujeto de aseguramiento, cuando el accidente ocurre encontrándose el asegurado en estado de embriaguez o bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante.

Tratándose del fallecimiento del titular del derecho a consecuencia de un riesgo de trabajo deberá expedirse el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo (formato ST-3) por los Servicios Médicos Institucionales del IMSS. De acuerdo con la fracción I del artículo 64 de la LSS, a la persona preferentemente familiar del titular del derecho fallecido que presente la copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funera, se le cubrirá una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los cuales serán determinados conforme a la Unidad de Medida y Actualización como resultado de la desindexación del salario mínimo (Diario Oficial de la Federación, 2016).

Asimismo, procederá el pago de las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, según sea el caso, en términos de los artículos 64, 65 y 66 de la LSS cuando las personas que concurran a solicitar los derechos de sucesión pensional cumplan con los requisitos para ser reconocidos como beneficiarios legales y reúnan los requisitos para acceder a las prestaciones en dinero y en especie establecidas en el seguro de riesgos de trabajo, cuyo financiamiento corresponde al patrón.

La esposa tendrá derecho a que se le cubra la pensión de viudez en términos de la fracción II del artículo 64 de la LSS. De acuerdo con la tesis número 2023438 del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, si dos o más personas se ostentan como cónyuges y demandan el pago de una pensión por viudez, la autoridad

laboral debe realizar una serie de diligencias para llegar al conocimiento de la calidad que guardan las posibles beneficiarias del asegurado fallecido, para determinar quién tiene mejor derecho para obtener la pensión. Así, deberá practicar las actuaciones siguientes:

a) Solicitar al Registro Civil de una o varias entidades, según sea el caso, que informe si existe acta de matrimonio entre las posibles beneficiarias y el trabajador fallecido y, en su caso, la remisión correspondiente; b) Investigar si las actas de matrimonio presentadas por las partes son apócrifas o perdieron su vigencia; c) Enviar oficio al Registro Civil que corresponda, para que informe si el acta de matrimonio presentada por la actora es auténtica o tiene alguna nota marginal de divorcio; y, d) De resultar necesario, hacer una comparación en cuanto a la temporalidad de la celebración de los matrimonios asentados en las actas del Registro Civil correspondientes. Lo anterior con la finalidad de otorgar el valor adecuado a las actas de matrimonio que se tengan a la vista, y decidir qué cónyuge tiene mejor derecho para la obtención y pago de la pensión por viudez solicitada (Pensión de viudez. Procedimiento que debe seguir la Junta para determinar, de entre los posibles beneficiarios, quién tiene mejor derecho a obtenerla. 2021)

Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión de viudez, la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, como lo dispone el artículo 65 de la LSS. Por lo tanto, si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a acceder a las prestaciones establecidas en el seguro de riesgos de trabajo.

De acuerdo con la jurisprudencia 2020731 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no son prueba suficiente para acreditar el concubinato las sentencias de jurisdicción voluntaria y, por ende, para ser titular del derecho de sustitución pensional (Diligencias de jurisdicción voluntaria, por sí solas carecen de valor pleno para demostrar el concubinato, cuando se reclama en juicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez: Códigos de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal –vigente en 2000– y del Estado de Veracruz, 2019).

Además, en el concubinato son completamente diferentes las situaciones en las que se encuentran, por una parte, las parejas que tienen hijos en común y, por la otra, las que no, toda vez que quienes viven durante cinco años continuos, y cumplen con los demás requisitos establecidos en la LSS, generan los derechos y obligaciones del concubinato. Éste no es un caso análogo al de quienes tienen hijos en común, y cumplen con otros requisitos, porque estos últimos generan los derechos y las obligaciones no por el transcurso del tiempo, sino por la procreación (Amparo en revisión 793/2014, 2015).

A la viuda (en su modalidad de esposa o concubina) del asegurado o pensionado se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que hubiese correspondido a aquél,

tratándose de incapacidad permanente total, así como el pago de un aguinaldo anual consistente en quince días del importe de la pensión. La pensión de viudez se incrementará de manera anual en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Por su parte, de acuerdo con la fracción IV del artículo 64 de la LSS, los huérfanos recibirán una pensión equivalente al 20% de la que hubiese correspondido al asegurado o pensionado fallecido ante una incapacidad permanente total y el pago de un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión percibida en términos del último párrafo del artículo 64 de la LSS. Por disposición de la fracción V del artículo 64 de la LSS, ante una doble orfandad la pensión se incrementará a un 30%.

Para que los menores de dieciséis años sean reconocidos como beneficiarios legales y accedan a los derechos de sucesión pensional del seguro de riesgos de trabajo deberán acreditar el parentesco con el asegurado (a) o pensionado (a). Adicionalmente, los mayores de dieciséis y hasta la edad de veinticinco años deberán exhibir en original la constancia de estudios que acredite la inscripción del beneficiario en el ciclo escolar correspondiente, expedida por instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, mientras que aquéllos que no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad deberán acreditar la incapacidad mediante el dictamen de beneficiario incapacitado (formato ST-6) expedido por los servicios médicos del IMSS.

Finalmente, a cada uno de los ascendientes del titular del derecho fallecido a causa de un riesgo de trabajo se les cubrirá una cantidad igual al 20% de la pensión que hubiese correspondido a cualquiera de ellos ante una incapacidad permanente total, además del pago de un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión. Para que opere el reconocimiento de los padres como beneficiarios legales es necesario acreditar su dependencia económica con el asegurado (a) o pensionado (a), pero únicamente tendrán derecho de sucesión pensional a falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario.

Los pensionados por viudez, orfandad o ascendencia también tendrán derecho al otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades que incluye la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

3. Acceso a los derechos de sucesión pensional en el seguro de vida establecido en la Ley del Seguro Social

Aunque parezca contradictorio con su denominación, el seguro de vida cubre la contingencia del fallecimiento del asegurado (a) o pensionado (a) por causas ajenas a un riesgo de trabajo. Los beneficiarios legales para acceder a los derechos de sucesión pensional en el seguro de vida deberán exhibir el acta de defunción para acreditar el fallecimiento del titular del derecho y acreditar que el asegurado cotizó 150 semanas o que se trataba de un pensionado por invalidez o por incapacidad permanente total cubierta por un período no mayor a cinco años, además de los requisitos que les impone la LSS dependiendo del tipo de derecho que sea solicitado o reclamado por el beneficiario.

La viuda o viudo tendrán derecho a que se les cubra la pensión, conforme a los artículos 131, 133, 142 y 145 de la LSS, que disponen que es equivalente al 90% de la pensión de invalidez y aunque deberá pagarse de manera mensual se incrementará de forma anual en el mes de febrero conforme al INPC, además de cubrirse el importe de treinta días del importe de la pensión de viudez por concepto de aguinaldo anual. Para que se decrete la procedencia del derecho de sucesión pensional en favor de la viuda o viudo es necesario que, de acuerdo con la fracción I del artículo 132 de la LSS, la muerte del asegurado (a) o del pensionado (a) no tenga lugar antes de cumplir seis meses de matrimonio.

Por su parte, la fracción IV del artículo 127 de la LSS establece el pago de una ayuda asistencial en favor de la viuda equivalente al 20% de la pensión conferida, pero para que opere su cobertura deberá acreditar a través de un dictamen médico que, debido a su estado físico requiere, ineludiblemente, de la asistencia de otra persona de manera permanente o continua.

Los mismos derechos corresponderán al esposo o concubinario, pero a diferencia del seguro de riesgos de trabajo, los Oficios 0952174000/194 y 0952 76613A10/2044 (IMSS, 2018) establecen que no es necesario que los varones acrediten que dependieron económicamente de la asegurada o pensionada fallecida para tener derecho a la sucesión pensional en el seguro de vida.

A falta de esposa, el derecho a la pensión de viudez corresponderá a la concubina con quien el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de la pensión de viudez.

Tratándose de los huérfanos de padre o madre, se les pagará una pensión equivalente al 20% de la pensión de invalidez. Cuando el huérfano lo fuera de padre y madre, la pensión de orfandad se incrementará al 30% de la pensión de invalidez, a partir de la fecha de la muerte del ascendiente. Las pensiones de orfandad y doble orfandad serán incrementadas de forma anual en el mes de febrero conforme al INPC y sus beneficiarios también percibirán por concepto de aguinaldo anual el equivalente a treinta días de la pensión percibida.

Para que los menores de dieciséis años sean reconocidos como beneficiarios legales y accedan a los derechos de sucesión pensional del seguro de riesgos de trabajo deberán acreditar el parentesco con el asegurado (a) o pensionado (a). Adicionalmente, los mayores de dieciséis y hasta la edad de veinticinco años deberán exhibir en original la constancia de estudios que acredite la inscripción del beneficiario en el ciclo escolar correspondiente, expedida por instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional, mientras que aquéllos que no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad deberán acreditar la incapacidad mediante el dictamen de beneficiario incapacitado (formato ST-6) expedido por los servicios médicos del IMSS.

Finalmente, a cada uno de los ascendientes del titular del derecho fallecido se les cubrirá una pensión equivalente al 20% de la pensión de invalidez, además del pago de un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión percibida. Para que opere el reconocimiento de los padres como beneficiarios legales es necesario acreditar su dependencia económica con el asegurado (a) o pensionado (a), pero únicamente tendrán derecho de sucesión pensional a falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario.

De acuerdo con la fracción V del artículo 127 de la LSS, los beneficiarios del seguro de vida tendrán derecho a las prestaciones en especie consistentes en asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado que tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales en los nueve meses anteriores al deceso, el IMSS pagará a la persona preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, una ayuda por este concepto, consistente en dos meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los cuales serán determinados conforme a la Unidad de Medida y Actualización como resultado de la desindexación del salario mínimo (Diario Oficial de la Federación, 2016).

Los derechos de sustitución pensional de los seguros de riesgos de trabajo y vida resultan incompatibles porque la causa del fallecimiento del titular del derecho tiene un origen diverso, pues cuando es resultado de un accidente o enfermedad de trabajo, su naturaleza es de orden profesional y su financiamiento corresponde al empleador, en cambio, en el seguro de vida el deceso es producido por causas de orden general que no guardan relación de causa-efecto-daño con un riesgo de trabajo y cuyo financiamiento correspondió al sujeto de aseguramiento, al patrón y al Estado.

4. Mantenimiento de los derechos de sucesión pensional en la Ley del Seguro Social

De acuerdo con la LSS, los beneficiarios de los derechos de sucesión pensional que derivan de los seguros de riesgos de trabajo y vida deberán reunir una serie de requisitos para mantenerlos cuando esto sea posible. En el caso de los hijos del titular del derecho fallecido, los derechos de sucesión pensional únicamente pueden mantenerse hasta los dieciséis o veinticinco años. Con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiquito equivalente a tres mensualidades de su pensión.

La LSS no impone a los menores de dieciséis años el cumplimiento de un requisito para conservar el derecho de sucesión pensional adquirido con el correspondiente acreditamiento del parentesco. En el caso de los hijos mayores de dieciséis y hasta la edad de veinticinco años es necesario que cada ciclo escolar exhiban en original la constancia de estudios expedida por instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional para acreditar que se encuentran estudiando. La falta de presentación de la constancia de estudios provoca la suspensión de los derechos de sucesión pensional.

Tratándose de los ascendientes del titular del derecho fallecido, la LSS no les impone ningún requisito para mantener el derecho de sucesión pensional adquirido ante la inexistencia de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario y la comprobación de su dependencia económica con el titular del derecho fallecido a consecuencia de un riesgo de trabajo o por causas ajenas a éste.

En el caso de las viudas o viudos con derechos de sucesión pensional derivados de los seguros de riesgos de trabajo y vida para mantenerlos la LSS les impone como requisito no contraer un nuevo matrimonio o entrar en concubinato. Asimismo, debido al carácter vitalicio de la pensión de viudez por riesgos de trabajo o la derivada del seguro de vida, su extinción tiene lugar cuando fallece su beneficiario. Al revocarse la pensión de viudez se decretará el pago de una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión cubierta.

Al reconocerse la procedencia de los derechos de sucesión pensional de las viudas o viudos a través de una resolución emitida por el IMSS, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales Laborales, ese derecho ingresó al patrimonio del beneficiario legal y adquirió la categoría de derecho adquirido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) define a los derechos adquiridos como aquellos que se incorporan al patrimonio de las personas y esta situación no debe ser objeto de afectación, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

De acuerdo con lo expuesto, la revocación de los derechos de sucesión pensional de las viudas o viudos por contraer un nuevo vínculo matrimonial o entrar en concubinato contraviene los artículos 14 de la CPEUM y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque les arrebató de su patrimonio el derecho adquirido consistente en el pago de las prestaciones decretadas en su favor como resultado del fallecimiento del asegurado (a) o pensionado (a) a consecuencia de un riesgo de trabajo o por causas ajenas a éste.

A lo anterior se adiciona la transgresión a los derechos de seguridad social, salud, libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conformar un nuevo núcleo familiar. Al dejar de otorgarse a la viuda o viudo las prestaciones de los seguros de riesgos de trabajo y vida que constituyen un derecho previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la CPEUM se pone en peligro su existencia porque sus beneficiarios dejan de percibir un ingreso de carácter económico, que en los casos de privación de un trabajo remunerado o de los medios para percibir una remuneración, se traduce en una pensión de carácter alimentaria que le permite subsistir y satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo, la revocación de la ayuda asistencial otorgada a la viuda o viudo, que demostró con base en un dictamen médico que, debido a su estado físico requiere, ineludiblemente, de la asistencia de otra persona de manera permanente o continua y la revocación de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades ponen en peligro su vida o afectan la calidad de la misma, además de atentar contra su salud al ser necesarias su cobertura en favor de la beneficiaria legal por estar imposibilitada para llevar a cabo las actividades cotidianas esenciales, incluso las destinadas a apoyar su autonomía personal.

Por su parte, el derecho al libre desarrollo de la personalidad que encuentra su fundamento en el principio de la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, en el valor de la libertad y en el principio de la autonomía de la voluntad, así como en la facultad de autodeterminación, es bidimensional al poseer un ámbito externo y otro interno.

Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal (Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Su dimensión externa e interna).

El reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica la toma de decisiones que solo importan y corresponden al individuo por estar relacionadas con su libertad para estructurar sus relaciones jurídicas conforme a sus deseos, preferencias e intereses, se transgrede cuando el legislador, conforme a estereotipos del pasado, impone a las viudas o viudos como requisito para mantener los derechos de sucesión pensional que no vuelvan a contraer matrimonio o entren en concubinato. La exigencia de este requisito debiera suprimirse de la LSS porque constituye una injerencia e impedimento que veda la consecución de un determinado proyecto de vida que el ser humano, como ente autónomo, proyecta para sí mismo, además de provocar la privación de un auténtico derecho adquirido de carácter patrimonial e impedir que el pensionado o pensionada por viudez forme un nuevo núcleo familiar para no perder sus derechos de sucesión pensional obtenidos en las vías administrativa o jurisdiccional como resultado del cumplimiento de los requisitos establecidos para su cobertura.

Conclusión

Los seguros sociales, como instrumento básico de la seguridad social, son indispensables para subsistir, contribuyen a elevar la calidad de vida y su disfrute con dignidad, aseguran la paz, la tranquilidad y el desarrollo de las naciones, además de formar parte del mínimo vital y ser componentes básicos del trabajo decente, por ello deben proporcionarse a sus derechohabientes (asegurados, pensionarios y beneficiarios) de manera adecuada y eficaz.

Ante la actual situación financiera que tienen los institutos de seguros sociales, por supuesto, que el reconocimiento de los beneficiarios es un tema relevante porque implica la erogación de recursos para cumplir con los esquemas prestacionales que demanda la creciente población derechohabiente y que pueden poner en peligro la estabilidad económica-financiera y la existencia de esos organismos.

La expedición de la LSS data del siglo pasado y ante una cambiante realidad en la conformación de las familias mexicanas amerita su revisión y adecuación a los tiempos que vivimos en donde la noción de familia no queda reducida a las relaciones derivadas del matrimonio, al englobar otros vínculos familiares de facto, como cuando las partes cohabitan fuera de cualquier vínculo marital o la inexistencia del vínculo biológico que acontece en el caso de los matrimonios del mismo sexo o las familias conformadas a través

de las técnicas de reproducción asistida, pero que en todos esos casos, se requiere de la protección de los seguros sociales en los que el sujeto de aseguramiento se encuentra inscrito y contribuye para su financiamiento.

A nivel internacional, las sentencias de las Salas Sociales de diversos tribunales españoles han determinado no limitar la regulación de las prestaciones de maternidad a la madre biológica, sino hacerlas extensivas por analogía a las personas que asumen la progenitura biológica (madre o padre) o una función similar como ocurre en la adopción, el acogimiento familiar y la maternidad subrogada.

En la revisión y modificación de las leyes de seguros sociales es necesario el estudio de los criterios emitidos por la SCJN en materia de reconocimiento de los beneficiarios y del examen realizado a los requisitos para que éste tenga lugar conforme a los actuales tiempos, soslayando injustificadas exigencias que respondieron a estereotipos del pasado que lesionan la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, aunado al estudio de la normatividad aplicable dependiendo del tipo de beneficiario, del sujeto obligado a su otorgamiento, así como de la naturaleza y cobertura de las prestaciones y derechos de sucesión pensional.

Fuentes de consulta

Bibliografía

Burgoa Orihuela, Ignacio (1979). *Las garantías individuales*. 12ª ed. México: Porrúa.

Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. Secretaría General. (1984). *Glosario de términos en la seguridad social de América*. Recuperado el 3 de noviembre de 2022, de <http://biblioteca.ciess.org/glosario/>

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (2021). Recuperado el 28 de septiembre de 2021, de <https://www.gob.mx/consar/articulos/que-son-los-beneficiarios-imss>

Fernández Ruiz, Silvestre. (1998). *Prestaciones y servicios del IMSS. Cálculos y procedimientos*. 3ª ed. México: Trillas.

Kelsen, Hans. (1995). *Teoría pura del derecho*. México: Porrúa.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021). Derecho a la seguridad social. Pensión por viudez en el concubinato. *Cuadernos de Jurisprudencia*, número 5, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Legisgrafía

Comité de Derechos Humanos. (2000). Comunicación número 941/2000, *Edward Young vs Australia*. Recuperado el 23 de diciembre de 2022, <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEK1gpXSQCyVRizp1wIXahVDWb4gWSBJpiAQBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7lg%3D%3D>

Comité de Derechos Humanos. (2003). *Young Vs. Australia, CCPR/C/78/D/941/2000 y X Vs. Colombia, CCPR/C/89/D/1361/2005*. Recuperado el 2 de enero de 2023, de <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEK1gpXS>

QCyVRizp0yotNhA0mJwQ7PWQCgNXH8UzzSWBCi8F%2BUiBM7UxD EehLetArDwQL3%2B0BvAGieftQ%3D%3D

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 3 de noviembre de 2022, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1989). *Opinión Consultiva OC-10/89*. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitada por la República de Colombia. Recuperado el 29 de noviembre de 2022, de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1263.pdf>

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2003). *Caso Cinco pensionistas vs Perú*, Sentencia de 28 de febrero de 2003. Recuperado el 21 de noviembre de 2022, de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). *Opinión Consultiva OC-24/17*. Recuperado el 23 de diciembre de 2022, de http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016). *Caso Duque vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia de 26 de febrero de 2016. Recuperado el 30 de diciembre de 2022, de http://www.corteidh.or.cr/doca/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito. (2021). Pensión de viudez. Procedimiento que debe seguir la Junta para determinar, de entre los posibles beneficiarios, quién tiene mejor derecho a obtenerla, 2023438. Recuperado el 22 de septiembre de 2022, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023438>

Diario Oficial de la Federación. (20 de enero de 2016). Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de desindexación del salario mínimo. Recuperado de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016#gsc.tab=0

Diario Oficial de la Federación. (27 de enero de 2023). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677514&fecha=20/01/2023#gsc.tab=0

Diligencias de jurisdicción voluntaria. Por sí solas carecen de valor pleno para demostrar el concubinato, cuando se reclama en juicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por viudez (Códigos de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal –vigente en 2000– y del Estado de Veracruz, 2019), 2020731 (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre de 2019). Recuperado el 23 de noviembre de 2022, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020731>

Instituto Mexicano del Seguro Social (2022). *Boletín de prensa número 554/2022*. Recuperado el 3 de diciembre de 2022, de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/i2f_news/IMSS%20BoleC3%ADn%20554.pdf

Ley del Seguro Social. Recuperado el 12 de noviembre de 2022, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_161220.pdf.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (septiembre de 2016). *Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Su dimensión externa e interna*, 2019357. Recuperado el 5 de enero de 2023, de <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019357>